

La deuda con Chile

Ignacio Imas A.
Gerente Imaginacion
Asuntos Públicos



Nuestra élite tiene una deuda pendiente que no tiene espacio para más prórrogas: la reforma al sistema político, el mismo que ellos habitan y que todos padecemos. La omisión de este debate no es azarosa; es una decisión deliberada. Mientras el Congreso tramita modificaciones insuficientes que apenas resultan un maquillaje, se posterga el fondo de una crisis que amenaza con devorar el futuro institucional. Para ser justos, la ausencia de propuestas en esta materia durante el último ciclo electoral fue total. De las modificaciones a las normas que regulan el aparato institucional, depende de la calidad de políticas públicas que tenemos.

Debemos ser francos, y reconocer que las reformas previas han creado incentivos para la polarización y el populismo. El reemplazo del binominal prometía mayor representatividad, pero terminó entregándonos una fragmentación atomizada, una supereproporcionalidad sin contrapesos. Y al modificar las barreras

para la creación de nuevos partidos sin establecer umbrales de seriedad ideológica, abrimos la puerta a la “política de nichos”. Los legisladores apelan a pequeños bolsones electorales que aseguran su permanencia. Como resultado, el Congreso ha dejado de ser el espacio de deliberación para convertirse en un mercado volátil, donde el interés particular prima sobre cualquier proyecto colectivo.

Este diseño ha generado incentivos perversos. Sin sanciones reales al “discolo” o al transfuguismo, la identidad de partido se diluye en el narcisismo de las pequeñas diferencias. Si un congresista no se siente cómodo, simplemente cruza la vereda o crea su propia sigla.

A este complejo escenario se suma el voto obligatorio. Sin reformas que castiguen la dispersión, este termina premiando no al más apto, sino al más estridente. El populismo no es sólo un acontecimiento de nuestro tiempo; también es resultado de un sistema que penaliza

el acuerdo y premia el escándalo.

¿Por qué, entonces, no se avanza? La respuesta es tan humana como decepcionante: la supervivencia política. El mayor motor que moviliza a nuestra élite es el instinto de conservación. Darle una altura de miras al tema de las reformas políticas, que involucren más

que la sencilla eliminación de cargos, es árido, pero que tiene costos. De fondo se omite que la calidad de las políticas públicas está amarrada a la salud de las instituciones que las generan.

Es imperioso superar el estadio actual. El objetivo de estas líneas

no es dar recetas, sino poner una voz de alerta. Necesitamos generar una masa crítica que obligue a los incumbentes a mirar más allá de su escaño, aunque esto se trate de arriesgarse. Si no generamos incentivos para bajar la polarización y fomentar la gobernabilidad, seguiremos habitando un sistema que se consume a sí mismo mientras la molestia y el desapego crecen.

“El populismo no es sólo un acontecimiento de nuestro tiempo; también es resultado de un sistema que penaliza el acuerdo y premia el escándalo”.

Olga Barbosa

Centro de
Investigación para la
Sustentabilidad UNAB



Hablemos de crecimiento y biodiversidad

Cuando hablamos de negocios y naturaleza, solemos pensar en los impactos negativos de las empresas en la biodiversidad, y poco en cuánto dependen de ella. La naturaleza queda relegada como “problema” del crecimiento económico, cuando en realidad es una de sus bases estructurales. Las empresas dependen de la biodiversidad a lo largo de toda su cadena de valor. La hidroelectricidad requiere ríos y cuencas saludables; las aseguradoras calculan riesgos según cómo los ecosistemas regulan el agua; incluso sectores aparentemente alejados de bosques y humedales necesitan agua confiable, estabilidad climática y ecosistemas funcionales.

Estas dependencias surgen de insumos materiales, de la regulación ambiental — como el control de la erosión o los flujos hídricos — y de beneficios culturales y sociales. Comprenderlas es clave para evaluar riesgos y oportunidades. Sin embargo, incluso si las empresas comprenden mejor sus impactos y dependencias, no basta. El problema es sistémico. En 2023, los flujos financieros con impactos negativos directos sobre la biodiversidad alcanzaron 7,3 billones de dólares, mientras solo 220 mil millones se destinaron a conservación y restauración, según el primer Informe Global de IPBES sobre Negocios y Biodiversidad. Esto muestra que lo rentable muchas veces se construye a costa del bienestar ambiental y social de largo plazo. Ampliar el concepto de “materialidad” más allá de lo estrictamente financiero es necesario, pero mientras la biodiversidad continúe siendo un costo o una concesión frente al negocio, la transformación será limitada. Necesitamos un entorno habilitante que alinee incentivos para que lo que es bueno para la biodiversidad también sea bueno para los negocios. El desafío no es solo si las empresas pueden contribuir, sino si el sistema económico y político lo permite. Impulsar ese alineamiento debiera ser prioridad para el nuevo gobierno. Las empresas pueden mejorar la medición y gestión de sus impactos y dependencias si se involucran más decididamente con la ciencia y el conocimiento indígena y local. Existe información valiosa generada por investigadores, comunidades y las propias empresas, pero permanece fragmentada y poco integrada en la toma de decisiones.

La paradoja del espectáculo

Marlene Torrealba

Asociación Gremial de Empresas
Productoras de Entretenimiento y
Cultura (Agepec)



El reciente informe global de la Unesco encendió las alarmas: el sector creativo podría perder hasta un 24% de sus ingresos hacia 2028 debido al impacto de la inteligencia artificial generativa y la falta de políticas de protección. Es una advertencia para países como Chile, donde la cultura y el entretenimiento en vivo son motores de desarrollo que hoy enfrentan una encrucijada crítica.

La paradoja es evidente. Mientras el 85% de las naciones reconoce a las industrias culturales como un pilar estratégico, la financiación pública global no alcanza el 0,6% del PIB. En Chile, el Informe Anual 2025 de Agepec, elaborado junto a la CNC, muestra una industria que, con profesionalismo, sostiene un ecosistema vital bajo presión creciente.

En 2024, la actividad de espectáculos en vivo aumentó 6% en número de eventos, confirmando la demanda ciudadana por la música y la cultura. Sin embargo, la facturación total cayó 12,2% en el mismo

período. Hacemos más, con menos ingresos agregados.

No hablamos solo de entretenimiento. Es una cadena de valor que moviliza a más de 800 pymes y genera más de 160 mil empleos directos e indirectos. Además, es un espacio de empleabilidad formal: el empleo permanente creció 39% en el último año, reflejando un compromiso con la estabilidad laboral.

El informe internacional advierte que el crecimiento se concentra en servicios digitales, ampliando brechas. Frente a ello, el espectáculo en vivo en Chile actúa como contrapeso territorial. El 49% de los eventos de socios de Agepec se realizó fuera de la Región Metropolitana, con un crecimiento regional de 11%. En 2024 se alcanzó un récord de 1.391 proveedores únicos, dinamizando economías locales, turismo, gastronomía y transporte.

Si la Unesco alerta sobre pérdida de ingresos por disrupción tecnológica,

Chile debe fortalecer lo que la tecnología no reemplaza: la experiencia del “en vivo”. Pero eso exige marcos regulatorios acordes. Con una facturación de \$115.049 millones y una asistencia anual de entre 2 y 3 millones de personas — superior al fútbol profesional —, el sector sigue enfrentando financiamiento frágil y ausencia de objetivos culturales específicos en planes nacionales.

Anticipar la crisis proyectada no es simbólico, es económico. El éxito del *sponsorship* (que creció un 13,1% en 2024) demuestra que el sector privado cree en este modelo. Es hora de que el Estado y las políticas públicas reconozcan que la cultura en vivo no

es un gasto, sino una inversión estratégica que genera empleo, identidad y desarrollo territorial. Si no corregimos la tendencia y protegemos este ecosistema de pymes y trabajadores, el riesgo de contraer nuestro talento y financiamiento será, lamentablemente, una realidad inevitable.

“Es hora de que el Estado y las políticas públicas reconozcan que la cultura en vivo no es un gasto, sino una inversión estratégica”.